Expediente núm. 280/2024
Resolución núm. 242/2025

CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA

Presidente: Don Ricardo García Macho
Vocales:
Doña Emilia Bolinches Ribera
Doña Sofía García Solís

En Valencia, a 6 de octubre de 2025

Reclamante: [redacted]
Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà

VISTA la reclamación número **280/2024**, formulada por [redacted], contra el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà y siendo ponente la vocal del Consejo, doña Emilia Bolinches Ribera, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero. - Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 18 de septiembre de 2024, [redacted] en calidad de concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, presentó por vía telemática, con número de registro 01UR1/2024/985, una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia. En ella reclama contra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà a una solicitud de acceso a información pública presentada el 19 de julio de 2024, en la que pedía información relativa a la situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento cuando se accedió al mismo en la actual legislatura, solicitando distinta documentación referida a la deuda municipal y a facturas impagadas.

Concretamente solicitaba:
"1.- Si la alcaldía se encontró con déficit económico, para ello solicitamos copia certificada de la deuda municipal a fecha de acceso de la nueva corporación en esta legislatura.
2.- Copia certificada de la deuda municipal a fecha del registro de este documento.
3.- Si existían facturas impagadas al acceder al gobierno y en que cantidades. Y si existen facturas a fecha de hoy no contabilizadas tanto en ejercicios anteriores o del actual y en que cantidades.
4.- Si el ayuntamiento está limitado económicamente para poder prestar sus servicios y realizar actividades con normalidad".

Segundo. - Al objeto de brindar una respuesta adecuada a la solicitud del reclamante, con carácter previo a la deliberación de la presente resolución, por parte de este Consejo se procedió a conceder trámite de audiencia al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà por vía telemática, instándole con fecha de 29 de octubre de 2024 a formular las alegaciones que considerara oportunas respecto de las cuestiones referidas, así como a facilitar a este Consejo cualquier información relativa al asunto que pudiera resultar relevante, siendo recibido el día 30 de octubre de 2024, según acuse de recibo que consta en el expediente.

En contestación a dicho requerimiento en fecha 14 de noviembre de 2024 se recibe en el Consejo, por vía telemática y con número de registro GVSIR/2024/279453, escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, en el que manifiesta lo siguiente:

"Hago referencia a requerimiento relativo a reclamación presentada por la concejal de este Ayuntamiento, [redacted], citada en el asunto y que tuvo entrada en este Ayuntamiento el 30/10/2024, registro núm. 2024-E-RC-2371.

Comunicar a ese Consejo que la documentación solicitada por los concejales del Grupo Popular de este Ayuntamiento no se les ha podido facilitar por que hasta el momento no se dispone de la misma.
Tanto es así, que se ha contratado una nueva empresa que gestione la contabilidad municipal a fin de esclarecer el contenido exacto de la partida de gastos pendientes de aplicación.
Esta partida de gastos, en el momento de la toma de posesión de esta Corporación superaba los 2 millones de euros.
Esta explicación se ha facilitado a los concejales del Grupo Popular y en Pleno de la Corporación se ha comprometido celebrar una reunión informativa con los responsables de la nueva empresa, una vez ésta esclarezca el contenido de esta partida de gastos".

Tercero. - Efectuada la deliberación del asunto en la sesión de la fecha de este Consejo, se adopta la presente resolución bajo los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Conforme a lo dispuesto en su art. 47.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022 valenciana), "el Consejo Valenciano de Transparencia es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa", siendo el órgano competente para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en dicha ley por parte de los sujetos obligados de los artículos 3 y 4, y requerir de oficio, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, la enmienda de los incumplimientos de tales obligaciones de publicidad y hacer el seguimiento de su cumplimiento, según recoge, entre sus funciones, el artículo 48 del mismo texto legal.

Segundo. - El artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana establece que frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información podrá interponerse reclamación potestativa (previa a la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa) ante el Consejo Valenciano de Transparencia. Estas reclamaciones se regirán por lo previsto en esta Ley, así como por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tercero. - Asimismo, la administración destinataria de la solicitud de acceso a la información pública objeto del presente recurso –el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà– se halla sujeta a las exigencias de la citada Ley, en virtud de lo dispuesto en su art. 3.1.d), que se refiere de forma expresa a *"las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes".*

Cuarto. - En cuanto al reclamante, se reconoce su derecho a acogerse a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana, toda vez que el art. 27 de dicha Ley garantiza el derecho a la información pública de *cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización legalmente constituida, sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.*
No debemos olvidar que quien solicita la información y presenta la reclamación es concejal de la corporación municipal, y sobre este particular ya se ha pronunciado este Consejo en numerosas ocasiones. Así, y por lo que se refiere a los cargos electos, el CVT considera, al igual que otros órganos de garantía de la transparencia, que nos encontramos ante un régimen cualificado de acceso a la información para los concejales y diputados, admitiendo sus reclamaciones y resolviendo las mismas en el sentido de que "es lógico que el derecho de acceso a la información que se garantiza a cualquier ciudadano no tenga mejores garantías que el derecho reforzado de acceso a la información de los cargos electos en el ejercicio de su función institucional y del derecho fundamental del art. 23.2 de la CE…Así pues, es criterio de este Consejo que la aplicación de la Ley 19/2013 no se impone ni sustituye los otros mecanismos que pueden ser utilizados igualmente por los cargos electos si lo consideran adecuado. Por ello, la garantía del derecho de acceso proporcionada por la reclamación ante este Consejo es aplicable en defensa del electo local a obtener información de su propia entidad siempre que para la resolución de estas reclamaciones se aplique preferentemente el derecho a la información regulada por el artículo 128 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y por las demás disposiciones

de la legislación de régimen local que sean aplicables, especialmente si son más favorables al acceso, y solo supletoriamente las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia". Resoluciones recientes del Consejo en esta materia: Res. 29/2023, Res. 42/2023, Res. 66/2023, Res. 93/2023, Res. 94/2023, Res. 169/2023, Res. 173/2023, Res. 186/2023.

La sentencia número 312/2022, de 10 de marzo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación en interés de ley, en la que, tras el examen de las normas sobre régimen local en materia de acceso a la información de los miembros de las corporaciones locales (artículos 77 LBRL y 14 a 16 ROF) en relación con las normas sobre transparencia (art. 23.1 y 24 y disposición adicional primera de la Ley 19/2013 de TBG), concluye: " Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera 2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información "se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio". Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".

Quinto. - Por último, la información solicitada, en principio, constituye información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según el cual se entiende por información pública los *contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.* En los mismos términos se pronuncia la Ley 1/2022 valenciana en su artículo 7.4.

Sexto. - Llegados a este punto, la reclamante solicita datos económicos consistente en conocer el estado de la deuda del municipio, así como las cantidades de las facturas impagadas, cuando se constituyó la legislatura y actualmente, siempre en caso de que existan, y si actualmente existen límites económicos que impidan un normal desarrollo de los servicios públicos prestados por el ayuntamiento. El Ayuntamiento en sus alegaciones, que no en su resolución de la solicitud de acceso que no formula, informa que la contabilidad del municipio ha sido contratada con una empresa dada la imposibilidad de gestionarla con recursos propios, no disponiendo de la misma en el momento de la solicitud, por lo que comunica que cuando tenga al día los datos económicos procederá a dar traslado a los concejales de la información solicitada. También informa que en el momento de la toma de posesión de la nueva corporación la partida de gastos pendiente de aplicación superaba los dos millones de euros.
Este Consejo considera que, dado el tiempo transcurrido desde esas manifestaciones, con toda seguridad dicho Ayuntamiento ya dispone de la información solicitada por la reclamante, por lo que no siendo voluminoso lo solicitado, sino todo lo contrario, dado que consiste en meros datos numéricos, dicha información debe ser entregada a la reclamante, la cual ostenta la condición de concejal del Ayuntamiento y que, por tanto, detenta una posición privilegiada de acceso a la información, a tenor de lo que establece el artículo 128.1 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que dice "*Para el mejor cumplimiento de sus funciones, los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente, o de la Junta de Gobierno Local, todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la corporación y sean necesarios para el desempeño de su cargo. El derecho de información de los miembros de las corporaciones locales tendrá carácter personal e indelegable".*
Que las alegaciones que realiza el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, basadas en limitaciones operativas, no desvirtúan en absoluto el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública que ostentan los ciudadanos. Tampoco la reclamante ha comunicado cambio alguno en su derecho de acceso a la información solicitada, por lo que este Consejo tiene que continuar con la tramitación de la reclamación.

Séptimo. - Por todo ello, atendiendo a la posición de acceso a la información de carácter privilegiado que se le otorga a los Concejales o cargos electos, considerando que la información que se reclama es pública y con derecho de acceso a la misma de los artículos 7.4 y 27 de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana, no concurriendo límites ni causas de inadmisión, de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado, este Consejo Valenciano de Transparencia considera que procede estimar la reclamación, debiendo facilitarse la información al reclamante en el estado en el que se disponga por la administración, sin que haya de ser copia certificada, ya que como ha resuelto este Consejo en numerosas ocasiones *"el derecho de acceso a la información no cubre el derecho a obtener **"certificados"** por parte de la administración, sino exclusivamente el acceso a la información"*. En estos casos, y en aras al principio de máxima transparencia, el Consejo viene considerando que, *"evidentemente certificada no, pero, si la administración dispone de esa información que se solicita, pues que se le haga entrega de la misma, pero tal y como disponga de ella la propia administración, sin necesidad de facilitarla certificada"*. Así se pronuncia en la Res. 24/2024, Res. 78/2024 y Res. 79/2024.

Sin olvidar que facilitar la información a un concejal no implica comunicar la información a un sujeto externo a la organización municipal, como sería el caso de un ciudadano. Además de que la información no queda fuera del ámbito de la organización, no puede obviarse el especial deber de sigilo por parte de los miembros de la Corporación, que deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros; siendo directamente responsables. Tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.

Octavo. - Finalmente parece oportuno recordar al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, la obligación de resolver de la Administración, recogida con carácter general por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 21 contempla la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla en el plazo máximo fijado por la norma reguladora correspondiente, en todos los procedimientos. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, en cuyo artículo 34.1. establece que *"las solicitudes de acceso a información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente"*, considerando el artículo 68.3 como infracción leve *"b) el incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública"*.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, el Consejo Valenciano de Transparencia acuerda

Primero. – Estimar la reclamación presentada por [redacted] en fecha de 18 de septiembre de 2024 contra el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, reconociendo el derecho de acceso a la información pública solicitada, según lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos 6º y 7º de la presente resolución.

Segundo. – Instar al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà a que, en el plazo de un mes desde la recepción de la presente resolución, haga entrega al reclamante de la información solicitada, debiendo comunicar a este Consejo las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo acordado.

Tercero. - Invitar al reclamante a que comunique a este Consejo cualquier incidencia que surja respecto de la ejecución de esta resolución y que pudiera perjudicar sus derechos e intereses**.**

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO VALENCIANO
DE TRANSPARENCIA